



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0301/2016

FECHA: 18 de julio de 2017

**ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**

En respuesta a la Reclamación número RT/0301/2016 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Por escrito registrado el 17 de mayo de 2016 en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, el ahora reclamante presentó una solicitud de acceso a la información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- en la que, con relación a las 6 últimas ediciones del Torneo Escolar de Debate de la Comunidad de Madrid, solicita la siguiente información:

- *Nombre o razón social de los adjudicatarios para su organización*
- *Cuantía efectivamente abonada en cada edición, con cargo a los presupuestos*
- *Detalle de los trabajos realizados por el/los adjudicatarios.*

Mediante Resolución del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de referencia de 2 de junio de 2016 se acuerda estimar la solicitud y, en consecuencia, se traslada al solicitante información sobre la empresa adjudicataria de las seis últimas ediciones del Torneo Escolar - 2010 a 2015-, las tareas desarrolladas -Diseño y formación, Dirección del proyecto, Proyecto escolar y organización de la final en el caso de 2010 y Diseño, dirección, organización y ejecución del proyecto en los restantes casos- y, finalmente, la cuantía, IVA incluido.

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



Al considerar que la información trasladada por la administración autonómica era incompleta, especialmente con relación al Torneo celebrado en 2016, por escrito registrado el 25 de julio de 2016, el ahora reclamante solicita la siguiente información respecto al Torneo Escolar de debate de la Comunidad de Madrid del año 2016:

- *Identidad del Adjudicatario*
- *Procedimiento de Adjudicación*
- *Presupuesto de adjudicación con y sin IVA*
- *Criterios de Adjudicación*
- *Número de Ofertas presentadas y/o valoradas*
- *Pliegos de condiciones administrativas particulares o indicación de no existir*
- *Condiciones Técnicas o indicación de no existir*
- *Proyecto Base o indicación de no existir*
- *Información disponible en cuanto a duración del contrato y eventuales prórrogas*

Mediante Resolución de 2 de agosto de 2016 del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación -notificada el posterior 18 de agosto- se considera que en la solicitud «*no concurre ninguna de las circunstancias limitativas del derecho de acceso a la información*», de modo que se resuelve «*Informar a la ciudadana que la empresa “ANEXA. Consultoría de calidad educativa y conocimiento” realizó trabajos de diseño, organización y ejecución del Torneo Escolar de debate de la Comunidad de Madrid en el 2016 por un importe de 21.314,15 euros (IVA incluido)*».

Frente a esta Resolución, por escrito registrado el 21 de agosto de 2016 en el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid la interesada plantea una reclamación al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-. A esta Reclamación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid le asigna el número de expediente 67/2016.

2. En paralelo a lo descrito sumariamente en el anterior antecedente, cabe recordar que la Comunidad de Madrid, en desarrollo de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG, atribuyó inicialmente la facultad de resolver la reclamación prevista en el artículo 24 de la LTAIBG al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid según se desprende del artículo 5 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en virtud del cual se incluye un nuevo artículo 21 en la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

Con posterioridad, la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo atribuye, en su artículo 1.3, al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el conocimiento y la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública previstas en el artículo 24 de la LTAIBG, potestativamente, contra las resoluciones expresas o las



desestimaciones presuntas dictadas por la Administración de la Comunidad de Madrid, por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial y por todas las entidades y organismos del sector público de ambas comprendidas en el ámbito de aplicación de la referida Ley.

La Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se Modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid prevé en el apartado 1 de su Disposición transitoria primera que “Hasta que se cree por Ley de la Asamblea de Madrid un órgano autonómico propio y entre en funcionamiento, la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, contra actos de la Comunidad de Madrid, entidades locales de su ámbito territorial y organismos y entidades dependientes de los anteriores, corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno integrado en la Administración General del Estado, con el que se suscribirá al efecto el correspondiente convenio de colaboración interadministrativa con la Administración General del Estado.

El pasado 2 de noviembre de 2016, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y La Comunidad de Madrid suscribieron el *Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE nº 13, de 16 de enero de 2017)*, cuya cláusula primera dispone que el mismo tiene por objeto “el traslado por la Comunidad de Madrid al Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por su Administración propia y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los organismos y entes vinculados o dependientes de ambas y por las entidades integradas en el sector público regional, local o municipal”.

El siguiente 7 de diciembre de 2016 se constituyó la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima del Convenio suscrito entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno), fecha en la que se trasladan a este Consejo las reclamaciones pendientes de resolver por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid entre las que figura la reclamación a la que se había asignado el número de expediente 67/2016 por parte de aquel Tribunal.

Por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se procedió a asignar número de expediente RT/0301/2016 a la reclamación de referencia.

3. Con posterioridad, mediante escrito de 29 de mayo de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se trasladó el expediente de referencia a la Secretaría General Técnica de la Consejería de



Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a fin de que en el plazo de quince días formularan las alegaciones que tuviesen por conveniente.

A través de un escrito registrado en esta Institución el 26 de junio de 2017, por la indicada Secretaria General Técnica se da traslado de escrito de alegaciones realizadas por la Dirección General de innovación, Becas y Ayudas de la Consejería de referencia en el que, toda vez que se ha remitido al ahora reclamante, se pone de manifiesto lo siguiente:

- *Los datos proporcionados en el Exp: 09-OPEN-00015.5/2016 en referencias a las empresas que realizaron las seis últimas ediciones del Torneo Escolar de Debate se realizaron como contrato menor, pues según se establece en el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros.*
- *En referencia al procedimiento de adjudicación de dichas empresas se está a lo dispuesto en el artículo 111, del citado Real Decreto legislativo donde se indica que “cuando se trate de otros contratos en los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente”.*
- *Los contratos han sido publicados en el Portal de contratación Pública de la Comunidad de Madrid, tal y como se indica en el artículo 8 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.*
- *En referencia a la formación del Torneo, indicar que las diferentes actividades formativas realizadas en la Red de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid que tienen entre los objetivos el conocimiento de las distintas técnicas y principios fundamentales de la enseñanza del debate no están asociadas a la participación en dicho Torneo.*

Por último, en el escrito de alegaciones se incluye un cuadro en el que el año de formalización del contrato menor -2010 a 2016-, la concreta empresa adjudicataria, el Concepto y la cantidad incluido el IVA.



#### 4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, tal y como se ha reseñado en los antecedentes de esta reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* - BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en delimitar el objeto que ha originado la presente Reclamación. De los antecedentes obrantes en el expediente se deduce que el mismo se concreta en los 9 aspectos



incluidos en la solicitud formulada por el ahora reclamante mediante escrito de 25 de julio de 2016 y que parcialmente fueron respondidos mediante Resolución de 2 de agosto de 2016 del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación.

Tomando en consideración lo anterior, en las alegaciones remitidas por la administración autonómica se ha puesto de relieve que el contrato de referencia se trata de un “contrato menor”.

Como premisa, hay que señalar que el artículo 109 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCS- prevé, con carácter general, que *“la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley”*. A esta previsión general, hay que añadir los requisitos que, con relación a la elaboración del expediente administrativo en los contratos menores se contemplan en el artículo 111 del TRLCS, a tenor del cual

*«1. En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.*

*2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.»*

De acuerdo con ello, en consecuencia, al tratarse de un contrato menor gran parte de la información solicitada por el ahora reclamante no existe por cuanto no la exige el vigente ordenamiento jurídico -entre otras, el número de ofertas presentadas y/o valoradas, pliegos de condiciones administrativas particulares, condiciones técnicas, proyecto base, duración y posibles prórrogas-.

Esta circunstancia, evidentemente, era conocida por la Administración autonómica, de manera que no se alcanza a entender cómo la misma no figura en la Resolución de 2 de agosto de 2016 elaborada para contestar a la solicitud de acceso a la información, máxime si se tiene en cuenta que el propio solicitante había planteado que en caso de no existir información sobre los pliegos de condiciones administrativas, las condiciones técnicas y el proyecto base, se hiciese constar tal hecho en la contestación.

4. Sentado lo anterior, por lo que respecta a la alegación de que los contratos han sido publicados en el Portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid, lo cierto es que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera oportuno



formular algunas consideraciones sobre la relación que media entre una solicitud de acceso a la información y una obligación de publicidad activa.

De esta manera, siguiendo el Criterio Interpretativo CI/009/20915, de 12 de noviembre de la presidencia de esta Institución, especifica el concreto lugar en el que se encuentra publicada la información contractual en la correspondiente web así como la manera en que ha de descargarse la información en formato Excel. Ahora bien, de los antecedentes obrantes en el expediente no consta que esta información haya sido trasladada al solicitante.

Cabe recordar que, por lo que respecta a la información relativa a los contratos menores, ésta se enmarca en la previsión del artículo 8.1.a) de la LTAIBG, constituyendo una de las informaciones de carácter económico, presupuestario y estadístico que debe ser publicada de oficio por la administración autonómica, en los términos del artículo 5 de la reiterada LTAIBG, desde el 10 de diciembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la citada norma para Comunidades Autónomas y Entidades Locales según se desprende de su Disposición final novena.

La circunstancia de que se configure como una obligación de publicidad activa la publicación de los contratos menores en los términos acabados de reseñar no excluye, evidentemente, que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información, pudiendo la administración, en tal caso, optar por alguna de las dos siguientes soluciones.

En primer lugar, la administración pública puede remitir al solicitante a la concreta dirección URL en la que se encuentra publicada la misma. En este caso, según se desprende del Criterio de este Consejo CI/009/2015, de 12 de noviembre de 2015, hay que tener en cuenta que,

*“En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sedes o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá redirigirse a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas”.*

Mientras que la segunda posibilidad de la que dispone la administración consiste en facilitar copia de la información solicitada de que se trate al solicitante de la misma.

En el caso que ahora nos ocupa, no consta que por la administración autonómica se haya llevado a cabo alguna de las dos posibilidades aludidas con relación a la solicitud de acceso a la información relacionada con los contratos menores de referencia. En efecto, en el expediente no obra contestación alguna de la





administración autonómica al ahora reclamante con relación a la información solicitada de modo que, atendiendo a los argumentos anteriores, procede estimar la presente reclamación en este aspecto concreto debiendo, en consecuencia, facilitar la administración autonómica la información solicitada a través de alguna de las dos formas descritas para entender satisfecho el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

### III. RESOLUCIÓN

**PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE** la Reclamación presentada en los términos y con el alcance previsto en el Fundamento Jurídico 4 de esta Resolución, por entender que su objeto se trata de información pública en posesión de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

**SEGUNDO: INSTAR** a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a que traslade la información solicitada a [REDACTED] por alguno de los medios descritos en el Fundamento Jurídico 4 de la presente Resolución en el plazo de quince días, remitiendo a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en igual plazo copia de su cumplimiento.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

